



SENTENCIA NO HA CAUSADO EJECUTORIA.

(1)*****.
VS.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE
TECATE, BAJA
CALIFORNIA.

EXPEDIENTE 54/2025
S.E.

Mexicali, Baja California, a veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco.

SENTENCIA DEFINITIVA que declara el **sobreseimiento** del juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, fracción II, al acreditarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 54, fracción XI, en relación directa con los artículos 1, segundo párrafo, 27, fracción II, inciso b), y 66, fracción II, todos de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, en razón de que **no se acreditó la existencia de acto administrativo** definitivo mediante el cual se haya decretado la remoción del actor como miembro de una institución policial.

GLOSARIO: Con el propósito de facilitar la lectura y comprensión de esta sentencia, se simplificará la mención de las normas legales, así como de las instituciones que se utilizan con recurrencia en el presente fallo, incorporando, para tal efecto, los siguientes términos:

Código Civil Adjetivo	Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California.
Constitución del Estado	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
Constitución Federal	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dirección de Seguridad Municipal.	Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tecate, Baja California.
Ley Estatal de Seguridad Ciudadana	Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, antes denominada Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California publicada el veintiocho de diciembre de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
Ley del Tribunal	Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California publicada el dieciocho de junio de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
Ley del Servicio Civil	Ley del Servicio Civil de los



	Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California.
Presidente Municipal	Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tecate, Baja California.
Sala Especializada	Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción.
Tribunal	Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.

Enseguida se procede a emitir sentencia en el juicio, y

R E S U L T A N D O:

I.- Que el siete de abril de dos mil veinticinco la parte actora presentó ante la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, en la ciudad de Tijuana, demanda de nulidad contra la resolución de tres de marzo de dos mil veinticinco emitida por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tecate, mediante la cual determinó ejercer la remoción libre al actor del cargo que venía desempeñando como Policía Comercial adscrito a la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tecate.

II.- Que por acuerdo de nueve de abril de dos mil veinticinco, esta Sala Especializada admitió la demanda respecto del referido acto impugnado, teniéndose como autoridad demandada al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tecate, quien al contestarla hizo valer causal de improcedencia y sobreseimiento, sosteniendo que la resolución impugnada corresponde a una determinación adoptada en el marco de una relación laboral y no corresponde a un acto administrativo definitivo.

III.- Que el once de agosto de dos mil veinticinco se citó a las partes para oír sentencia de primera instancia, quedando cerrada la instrucción del presente juicio, por lo que se está en condiciones de resolver la controversia planteada en el juicio; y

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Especializada es competente para resolver el presente juicio con fundamento en el artículo 55, Apartado A, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y artículos 1, 4, fracción III, 6, 25, 27, fracción II,

inciso b, de la Ley del Tribunal, tomando en consideración que el acto impugnado se atribuye a una autoridad municipal y versa sobre la remoción de quien se ostenta como un miembro de una institución policial del municipio de Tecate, Baja California.

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se procede a analizar respecto de la existencia de causales de improcedencia y sobreseimiento que impidan la resolución de fondo en el presente juicio.

De conformidad con el último párrafo del artículo 54 de la Ley del Tribunal, **la procedencia del juicio será examinada aun de oficio.**

La autoridad demandada en su contestación manifestó que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 54, fracción I, de la Ley del Tribunal, consistente en que el acto impugnado no es de los que corresponde conocer a este Tribunal; al respecto, debe reiterarse que el acto impugnado por el actor consiste en la remoción de su cargo como miembro de una institución policial municipal, de tal forma que el asunto así planteado sí es de los que corresponde conocer a este Tribunal, específicamente de la Sala Especializada, atendiendo a la naturaleza de la acción intentada y de las pretensiones expuestas.

Esto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, inciso b, de la Ley del Tribunal, que establece que la Sala Especializada del Tribunal es competente para conocer de las resoluciones que determinen la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de las instituciones policiales.

En este tenor, tomando en consideración la **naturaleza de la acción ejercitada** por el demandante, esta Sala Especializada del Tribunal **sí resulta competente por materia** para conocer del presente asunto.

Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en seguida se transcribe:

COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.

En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda.

Registro digital: 195007. Instancia: Pleno. Novena Época. Materias(s): Común. Tesis: P./J. 83/98. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Diciembre de 1998, página 28. Tipo: **Jurisprudencia**.

No obstante lo anterior, esta Sala Especializada advierte que en el presente caso se actualiza la **diversa causal de improcedencia** prevista en el artículo 54, fracción XI, y, en consecuencia, procede el sobreseimiento del juicio por la causa prevista en el artículo 55, fracción II, ambos preceptos de la Ley del Tribunal, toda vez que **no existe acto administrativo definitivo** que haga procedente el juicio contencioso administrativo en términos de lo dispuesto en los artículos 1, segundo párrafo, 27, fracción II, inciso b), y 66, fracción II, de la Ley del Tribunal, como se explica a continuación.

Estudio oficioso de la causa de improcedencia establecida en la fracción XI, del artículo 54, de la Ley del Tribunal.

Los artículos 54, fracción XI, y 55, fracción II, de la Ley del Tribunal, establecen:

"ARTÍCULO 54.- El juicio ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa es improcedente contra actos o resoluciones:
(...)

XI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley.
(...)"

ARTÍCULO 55.- *Procede el sobreseimiento del juicio:*

II.- *Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el Artículo anterior; (...)"*

Ahora, como se expuso en el capítulo de "Resultando" de la presente sentencia, el nueve de abril de dos mil veinticinco se admitió la demanda, respecto del acto impugnado descrito como:

- *La resolución de tres de marzo de dos mil veinticinco, emitida por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tecate, Baja California mediante la cual determinó ejercer la remoción libre a la parte actora al puesto que venía desempeñando como Policía Comercial adscrito a la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tecate.*

Sin embargo, de las actuaciones practicadas en el presente juicio, y las constancias que lo integran, se advierte que **no quedo acreditado** que el demandante **(1)******* haya contado con la calidad de miembro de una institución policial incorporado a la carrera policial, en términos de la legislación aplicable, y en consecuencia, **no se acreditó** la existencia de una **relación administrativa entre las partes**, de las que se generan con motivo del régimen especial previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal.

En efecto, es preciso señalar que el juicio contencioso administrativo se rige por el principio de decisión previa, en virtud de que es un proceso impugnativo que **se instruye a partir de un acto administrativo** originado con anterioridad a la presentación de la demanda, mediante el cual **se manifiesta la voluntad del poder público** con efectos jurídicos particulares, cuya validez o invalidez constituye la materia del juicio.

Lo anterior, se advierte de lo dispuesto en los artículos 1, segundo párrafo, 27, fracción II, inciso b), y 66, fracción II, de la Ley del Tribunal, de subsecuente inserción, los cuales definen la naturaleza administrativa de los actos o resoluciones que hacen procedente el juicio contencioso ante esta Sala del Tribunal, precisando que en la demanda se deberá indicar el acto o resolución administrativo que se impugna.



ARTÍCULO 1. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California es un órgano constitucional autónomo, independiente de cualquier autoridad, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y de gestión presupuestal, e imperio suficiente para hacer cumplir sus resoluciones.

El Tribunal tendrá a su cargo, dirimir las **controversias de carácter administrativo** y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios, Entidades Paraestatales, Paramunicipales y los particulares; así como entre el fisco estatal y los fiscos municipales, sobre preferencias en el cobro de créditos fiscales.
(...)

ARTÍCULO 27. La Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción es competente para conocer de:
(...)

II. Los juicios que se promuevan contra los **actos o resoluciones definitivas** siguientes:
(...)

b) Las **resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas**, así como las que determinen la separación, **remoción**, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los **miembros de las instituciones policiales**, en términos de la legislación aplicable;

ARTÍCULO 66. La demanda deberá indicar:
(...)

II. Resolución o acto administrativo que se impugne;

En efecto, la acción contenciosa administrativa ante este Tribunal, no procede contra todo acto de la administración pública estatal o municipal que el particular considere lesivo de sus intereses o derechos. Se trata de un juicio de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía se encuentra condicionada a una serie de requisitos establecidos expresamente en la norma como hipótesis de procedencia de dicha acción.

Así, por disposición de la propia Ley del Tribunal, para que un acto u omisión emanado de una entidad pública pueda considerarse como un acto de autoridad para la procedencia del juicio contencioso administrativo, **debe tener como premisa que se origine en una relación de supra a subordinación con el gobernado**, tal como se define en los siguientes criterios emanados de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Primer Tribunal Colegiado en materias administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, que si bien no constituyen jurisprudencia o precedente obligatorio, sí resultan un criterio orientador al definir el concepto y elementos del acto de autoridad para la procedencia tanto del juicio administrativo como del juicio de amparo.

AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.

La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado.

Contradicción de tesis 71/98. Registro digital: 194367. Instancia: Segunda Sala. Novena Época. Materias(s): Administrativa. Tesis: 2a. XXXVI/99. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Marzo de 1999, página 307. Tipo: Aislada.

ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SUS ELEMENTOS.

Los elementos o requisitos necesarios de un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de nulidad o contencioso administrativo son: **a) La existencia de una relación de supra a subordinación con un particular;** b) Que esa relación **tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa**, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior se corrobora con la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de (1) coordinación, **(2) supra a subordinación**, y (3) supraordinación, en la cual, las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de éstas se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral, siendo la nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación; las segundas son las que se entablan entre gobernantes y particulares y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destacan el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de

los derechos humanos, que la caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos limita el actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; finalmente, las terceras son las que se establecen entre los órganos del propio Estado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

Registro digital: 2005158. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materias(s): Administrativa. Tesis: XI.1o.A.T.15 A (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, página 1089. Tipo: Aislada.

No obstante, en la especie **no logró acreditarse** que la remoción de la que se duele el actor se haya originado en el marco de una **relación administrativa** (relación jurídica de supra a subordinación), sino por el contrario, se originó en el marco de una **relación jurídica de coordinación** de naturaleza laboral.

Se dice así, en razón de que conforme a lo dispuesto en los artículos 21, párrafos noveno y décimo, inciso a), y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal; 1, 5, fracciones V, VIII y X, 39, apartado B, fracción III, 73, 78 y 85, primer párrafo, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en relación con los artículos 1, fracción IV, último párrafo, 5, fracciones VII y XVI, 23, 24, fracción III, y 94, fracción IV, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de diciembre de dos mil veinte (denominación modificada mediante Decreto número 66, publicado en el Periódico Oficial el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno), que resulta la ley vigente que regula el servicio de seguridad pública en el Estado; y, numerales 1, 2, punto 21, 17, 18, 19, fracción VIII, 28 y 65 del Reglamento Interior para la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tecate, y 47 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Tecate, vigentes al momento del acto del que se duele la actora, **la parte actora no tiene una relación administrativa con el Municipio, al no acreditarse que pertenece a la carrera policial.**

Para sustentar lo anterior, habremos de precisar y revisar el marco jurídico que regula el servicio de seguridad pública en nuestro país, con el propósito de definir los conceptos básicos que nos permitirán dilucidar esta controversia.

En primer orden, la Constitución Federal en sus artículos 21, párrafos noveno y décimo, inciso a), y 123, apartado B, fracción XIII, establecen el concepto del servicio



BAJA CALIFORNIA

de seguridad pública y la naturaleza jurídica de la relación que guardan los servidores públicos que realizan dicha función con el Estado, al precisar lo siguiente:

"Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

(...)

La **seguridad pública es una función del Estado** a cargo de la **Federación, las entidades federativas** y los **Municipios**, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La **seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas**, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las **instituciones de seguridad pública**, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las **instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno** deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y **conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública**, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

- a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones **será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.**

(...)"

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

(...)

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

(...)

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los **miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.**

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los **miembros de las instituciones policiales** de la Federación, las entidades federativas y los **Municipios**, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

(...)"

Luego, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Federal, en sus artículos conducentes establece:

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos **en materia de Seguridad Pública** y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en esta materia.

Sus **disposiciones son de orden público e interés social** y de **observancia general en todo el territorio nacional**.

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

(...)

V. Carrera Policial: al Servicio Profesional de Carrera Policial;

(...)

VIII. Instituciones de Seguridad Pública: a las **Instituciones Policiales**, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel federal, local y municipal;

(...)

X. Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que realicen funciones similares;

(...)"

Artículo 39.- La **concurrencia** de facultades entre la Federación, las entidades federativas y los **Municipios**, quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. (...)

B. Corresponde a la Federación, a las entidades federativas y a los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias:

III. Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera Policial, Profesionalización y Régimen Disciplinario;

(...)"

Artículo 73.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones Policiales y sus integrantes se rigen por la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Todos los **servidores públicos de las Instituciones Policiales** en los tres órdenes de gobierno que **no pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza**. Los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza.

Artículo 78.- La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las Instituciones Policiales.

Artículo 85.- La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá por las normas mínimas siguientes:

(...)

La Ley Estatal de Seguridad Ciudadana, vigente al momento de los hechos narrados en la demanda, en los artículos pertinentes establece:



ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia obligatoria, y tiene por objeto establecer las bases, mecanismos e instrumentos para garantizar la paz y la seguridad de las personas que habitan y transitan en el Estado de Baja California, con pleno respeto a los derechos humanos, a través del establecimiento de los siguientes elementos:

(...)

IV.- Las disposiciones que regulan la **relación administrativa** de los Miembros de las Instituciones Policiales y la Agencia Estatal de Investigación con el órgano público y las dependencias o entidades a las que pertenezcan ya sean estatales o municipales, con motivo de la prestación de sus servicios, de conformidad con las bases de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los municipios, atendiendo a su autonomía y conforme a su propia organización, podrán reglamentar las disposiciones de esta Ley en el ámbito de su competencia.

ARTÍCULO 5.- Para efectos de esta Ley, además de los conceptos contenidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se entenderá por:

(...)

VII.- Elementos de Apoyo: Los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad que **no pertenecen a la Carrera Policial**, Ministerial o Pericial;

(...)

XVI.- Miembro: El o los elementos de las Instituciones Policiales que **cuenten con nombramiento policial** otorgado por autoridad competente;

(..)

ARTÍCULO 23.- Son Instituciones Policiales en el Estado, las siguientes:

I.- La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana;

II.- La Fuerza Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria;

III.- La **Policia Municipal**; y,

IV.- Las demás que se constituyan con estricto apego a la Ley.

Las Instituciones Policiales **estarán facultadas para desarrollar las funciones** establecidas en el artículo 77 de la Ley General, en términos de lo previsto en su último párrafo.

Las Instituciones Policiales, de acuerdo a su ámbito competencial, y para la consecución del orden, la paz y tranquilidad públicos; desplegarán acciones de proximidad, comunicación y participación directa con los ciudadanos.

(Nota: este artículo corresponde al numeral 17 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California publicada el veintiocho de diciembre de dos mil veinte y posteriormente fue reformado a su numeral actual)

ARTÍCULO 24. Son **auxiliares** de las Instituciones Policiales y de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado:

(...)

III.- Los prestadores de servicios de seguridad privada y **de similar naturaleza que operen o se instalen en el Estado**;

(...)

(Nota: este artículo corresponde al numeral 18 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California publicada el veintiocho de diciembre de dos mil veinte y posteriormente fue reformado a su numeral actual)

ARTÍCULO 94.- Se **excluyen del ámbito de aplicación** de este Título:

(...)

IV. Tratándose de **los municipios, éstos determinarán en sus respectivos reglamentos**, quienes, en su caso, **serán excluidos de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta Ley.**



Por último, el **Reglamento interior para la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tecate**, en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado el dos de abril de dos mil veintiuno, y el **Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Tecate**, en vigor desde el nueve de agosto de dos mil catorce, en sus artículos relativos disponen:

Reglamento interior para la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tecate.

Artículo 1.- Las disposiciones de este ordenamiento son de observancia obligatoria para la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tecate, Baja California y para cualquier otro cuerpo de Policía constituido al amparo del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Tecate, Baja California, de la Ley del Régimen Municipal del Estado de Baja California y la LSPEBC del Estado de Baja California. Siendo competente para la aplicación del presente Reglamento el Ayuntamiento, la Comisión, la Oficialía Mayor y la Dirección.

Artículo 2.- Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

(1 al 20)

21 . MIEMBRO: Miembro en activo de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tecate, Baja California, que cuente con nombramiento oficial otorgado por el Ejecutivo Municipal.

(...).

Artículo 17.- La Dirección se integra con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con sus fines y su estructura de mando es la siguiente:

- A Comisario General;
- B. Comisario Jefe;
- C. Inspector General;
- D. Inspector de Investigación;
- E. Inspector de Prevención;
- F. Inspector de Reacción;
- G. Sub Inspector;
- H. Oficiales;
- I. Sub Oficial;
- J. Policía Primero;
- K. Policía Segundo;
- L Policía Tercero;
- M. Policía.

Artículo 18.- El Comisario General corresponde a la persona que, a propuesta del C. Presidente Municipal, y que es designada como Director de Seguridad Ciudadana Municipal por el H Ayuntamiento de conformidad con lo establecido por el Reglamento de la Administración Pública: en tal virtud el Comisario General ejerce el mando de la Fuerza de Policía y Tránsito Municipal, del Departamento del Transporte Público Municipal y en general sobre todo el personal administrativo, académico y demás elementos que integran la Dirección.

Artículo 19.- Para el cumplimiento de sus funciones el Comisario General contará con la siguiente estructura orgánica:

- I. El Jefe de Departamento Administrativo;
- II. El Jefe del Departamento de Capacitación y Adiestramiento;
- III. El Jefe de Departamento de Tránsito;
- IV. El Jefe del Departamento de Policía;



- V. El Jefe del Departamento de Transportes;
VI. El Jefe del Departamento de Servicios a la Ciudadanía;
VII. El Jefe del Departamento de Servicios Especiales; y
VIII. El Jefe del Departamento de la Policía Comercial.

Quienes colaboran en la preparación, concepción, planeación, control, supervisión y apoyo de las actividades de Seguridad Pública. Tránsito y Transporte Municipal.

Artículo 28.- El Jefe del Departamento de la Policía Comercial le corresponde la coordinación y administración del **servicio de vigilancia** que se brinda a **comercios**, empresas, eventos particulares, bancos e industrias **a cambio del pago de una tarifa establecida en la Ley de Ingresos del Municipio de Tecate**, Baja California, para el Ejercicio Fiscal correspondiente. publicada en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo 65.- Se excluyen del ámbito de aplicación del presente capítulo de este Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en la LSPEBC a:

- A. Comisario General;
B. Comisario Jefe;
C. Aquellas personas que además de **no contar con el nombramiento** que los acredite como Miembro, **desempeñen funciones ajenas a las de Seguridad Pública** de manera permanente, aun cuando laboren en la Dirección.

Las faltas o delitos en que incurran en el ejercicio de sus funciones se sujetarán a los procedimientos establecidos en la Ley de Responsabilidades.

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Tecate

Artículo 47.- El nombramiento es el documento formal que se otorga al policía de carrera de nuevo ingreso por parte de la autoridad competente, del cual se deriva la relación jurídico-administrativa, y con el cual, se inicia en el servicio y adquiere los derechos de participación para la permanencia, formación, promoción, desempeño, dotaciones complementarias y retiro, en los términos de los procedimientos aplicables.

De las disposiciones legales antes transcritas podemos establecer las siguientes premisas básicas:

- La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, Entidades federativas y **Municipios**, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad, y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la preservación del **orden público** y la **paz social**. (Artículo 21 de la Constitución Federal)
- El artículo 123, Apartado B, de la Constitución Federal regula las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, y, en su fracción XIII, establece que los militares, marinos, personal del servicio exterior, Agentes del Ministerio Público, peritos y **los miembros de las instituciones policiales, se registrarán por sus propias leyes**. (Artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal)



Las Instituciones Policiales son: los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centro de arraigos; y en general, todas las dependencias **encargadas de la seguridad pública** a nivel federal, local y **municipal** que realicen funciones similares. (Artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública)

- Todos los **servidores públicos** de las **instituciones policiales** en los tres órdenes de gobierno que **no pertenezcan a la Carrera Policial** se **considerarán trabajadores de confianza**. (Artículo 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública)
- La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente que establece los lineamientos que define los procedimientos de **ingreso**, certificación y permanencia (entre otros), así como la separación o baja del servicio de los miembros de las Instituciones Policiales. (Artículo 5, fracción V, y 78 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública)
- Se define como “**Elemento de apoyo**” a todo aquel servidor público de las instituciones de seguridad pública que **no pertenecen** a la carrera policial. (Artículo 5, fracción VII de la Ley de Seguridad Ciudadana.)
- Los **elementos de apoyo se considerarán trabajadores de confianza**. Los efectos de su **nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento**, de conformidad con las disposiciones aplicables. (Artículo 73, segundo párrafo, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública)
- La Ley de Seguridad Ciudadana **distingue** entre las instituciones policiales y los servicios **auxiliares** de éstas. (Artículos 17 y 18 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California publicada el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, actualmente 23 y 24 de Ley Estatal de Seguridad Ciudadana).
- Los **municipios**, atendiendo a su **autonomía** y conforme a su propia organización, **determinarán** en sus respectivos **reglamentos**, quienes, en su caso, **serán excluidos de la aplicación del régimen administrativo** que regula el servicio de seguridad

pública. (Artículos 1, último párrafo, y 94, fracción IV, de la Ley de Seguridad Ciudadana)

- El titular de la Dirección de Seguridad Municipal (Comisario General) contará en su estructura con un Jefe del Departamento de la Policía Comercial, encargada de brindar el servicio de **vigilancia** que se brinda a **comercios, empresas, eventos particulares, bancos e industrias** a cambio del **pago de una tarifa establecida en la Ley de Ingresos** del Municipio de Tecate (Artículos 17, 19 y 28 del Reglamento Interior para la Dirección de Seguridad Municipal)
- El **nombramiento** es el documento expedido por autoridad competente en favor del miembro, del cual se deriva la relación jurídico-administrativa, y con el cual, se inicia en el servicio y adquiere los derechos de participación en la Carrera Policial. (Artículo 47 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Tecate)

Conforme a la normatividad analizada, las relaciones jurídicas entre las instituciones policiales y sus integrantes se rigen por la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Federal, siendo esta relación de naturaleza administrativa; no obstante, se establece una precisión clara en el sentido de que los servidores públicos de las instituciones policiales, en los tres órdenes de gobierno, que **no pertenezcan a la carrera policial, se considerarán trabajadores de confianza.**

El demandante señala como acto impugnado la **remoción libre** del cargo de policía comercial adscrito a la Dirección de Seguridad Municipal, la cual le fue notificada el catorce de marzo de dos mil veinticinco.

Para acreditar la existencia del acto impugnado y la afectación a su legítimo interés, la parte actora ofreció las pruebas consistentes en:

- Documental consistente en recibo de pago de nómina a su nombre, que ampara el pago de sueldo y prestaciones por los periodos correspondiente al siete al veinte de septiembre de dos mil veinticuatro, en el puesto de "Policía Auxiliar Comercial";
- Documental consistente en original del oficio número (2)*****, de fecha tres de marzo de dos mil veinticinco, suscrito por el

Presidente Municipal, dirigido al actor (1)*****, con firma manuscrita y sello de tinta con la leyenda "H. Ayuntamiento Constitucional Tecate, B.C. – Presidencia Municipal", mediante el cual se le comunicó la remoción libre al puesto que venía desempeñando como Policía Comercial adscrito a la Dirección de Seguridad Municipal;

- Documental consistente en original del oficio (2)*****, suscrito por la Directora General del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Fiscalía General del Estado.
- Informe de autoridad a cargo del Presidente Municipal para que exhiba las constancias relacionadas con la remoción del cargo del actor.

Por su parte, la autoridad Presidente Municipal al dar contestación a la demanda en el presente juicio ofreció como prueba el oficio número (2)***** de fecha tres de marzo de dos mil veinticinco suscrito por Román Cota Muñoz en su carácter de Presidente Municipal, dirigido al actor (1)*****, con firma manuscrita y sello de tinta, mediante el cual se le comunicó la remoción libre al puesto que venía desempeñando como Policía Comercial adscrito a la Dirección de Seguridad Municipal, señalando que ya obraba en autos por haber sido exhibido adjunto a la demanda en original por el actor (visible a fojas 30 a la 34 de autos).

Del texto de dicho documento se advierte que fue emitido y suscrito por el Presidente Municipal, dirigido al aquí demandante (1)***** a efecto de hacerle de su conocimiento que a partir de la fecha de notificación se le remueve del puesto que venía desempeñando como "Policía Comercial", citando como fundamento los artículos 1, 2 y 51, fracción I, de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California.

Sustancialmente, en dicho documento el Presidente Municipal sostiene que el actor (1)***** desempeñaba el puesto de Policía Comercial y guardaba una **relación laboral** con el Ayuntamiento de Tecate, por lo que con fundamento en los artículos antes citados, contaba con atribuciones para removerlo libremente de su cargo por tratarse de un **trabajador de confianza**.

Visto lo anterior, tenemos que el problema jurídico a dilucidar consiste en determinar:

¿Qué cargo o empleo desempeñaba el actor (1)***** para el Ayuntamiento de Tecate?

- b. Conforme al cargo o empleo, ¿tiene la calidad de miembro de una institución policial de los que pertenecen a la carrera policial y originan una relación administrativa con la autoridad pública?
- c. ¿Existió un **acto administrativo** emanado de una **relación de supra a subordinación** por el cual se **haya determinado la separación** del actor del cargo de Policía Comercial?, o, ¿Se trata de un acto que se originó en una **relación de coordinación de naturaleza laboral**?

A continuación, se desarrolla el análisis necesario para dar respuesta cada uno de estos cuestionamientos en los siguientes términos.

a. ¿Qué cargo o empleo desempeñaba el actor (1)*** para el Ayuntamiento de Tecate?**

A efecto de determinar la naturaleza del cargo que desempeñaba el actor (1)***** para el Ayuntamiento de Tecate, analizaremos las pruebas exhibidas y admitidas al actor, así como las ofrecidas por la autoridad demandada.

En primer término, debe precisarse que ni el actor ni la autoridad demandada exhibieron nombramiento alguno expedido a favor del actor en el que se especifique el cargo, puesto o funciones que le fue designado al ingresar a la Dirección de Seguridad Municipal, es decir, **no se acreditó en juicio que el actor contara con nombramiento policial** expedido por autoridad competente.

No obstante, nos referiremos a la documental consistente en original del oficio número (2)***** de fecha tres de marzo de dos mil veinticinco suscrito por Román Cota Muñoz en su carácter de Presidente Municipal, dirigido al actor (1)*****, con firma manuscrita y sello de tinta, mediante el cual se le comunicó la remoción libre al puesto que venía desempeñando como Policía Comercial adscrito a la Dirección de Seguridad Municipal, el cual fue exhibido por el actor y ofrecido como prueba por ambas partes.

Dicho documento, contiene firma autógrafa del Presidente Municipal que lo expide, sello, membrete y logotipo



del Ayuntamiento de Tecate, aunado que fue reconocido y ofrecido como prueba por la autoridad demandada, por lo que hace **prueba plena** de su existencia y contenido con fundamento en los artículos 285, fracciones I y III, 322, fracción II, 323, 400 y 405, del Código Civil Adjetivo del Estado, de aplicación en materia contenciosa administrativa con fundamento en los artículos 41, penúltimo párrafo, y 103, de la Ley del Tribunal.

En el texto del oficio (2)*****, el Presidente Municipal afirma de manera expresa y clara que el actor (1)***** se venía desempeñando para el Ayuntamiento de Tecate en el puesto de Policía Comercial adscrito a la Dirección de Seguridad Municipal, lo que constituye una admisión expresa de que el actor ostentaba el cargo de Policía Comercial.

Lo anterior, aunado a la diversa documental admitidas a la parte actora consistente en recibo de nómina (visible a foja 35 de autos), expedido a su nombre, que amparan el pago de sueldo y prestaciones por el periodo indicado en cada uno de ellos en el puesto de "Policía Auxiliar Comercial".

Documentos que, al **no haber sido objetados en cuanto a su autenticidad y contenido** por la autoridad demandada, contener membrete y logotipo del Ayuntamiento de Tecate, se considera hace prueba plena de su existencia y contenido con fundamento en los artículos 285, fracción III, 322, fracción II, 323, y 405, del Código Civil Adjetivo del Estado, de aplicación en materia contencioso administrativa con fundamento en los artículos 41, penúltimo párrafo, y 103, de la Ley del Tribunal.

Además, su contenido es congruente con el oficio de remoción descrito en párrafos anteriores, y no se encuentran desvirtuados con prueba en contrario.

De tal forma, al adminicularse el contenido de las documentales consistentes en original del oficio de remoción como Policía Comercial, con el recibo de nómina a nombre del actor, resultan aptas y eficaces para establecer, que el **cargo o empleo** con el que ingresó el actor (1)***** a la Dirección de Seguridad Municipal, fue el de "**Policía Comercial adscrito a la Dirección de Seguridad Municipal**".

Así, habiendo establecido el cargo que desempeñaba el actor para el Ayuntamiento de Tecate, lo procedente, es realizar el estudio necesario para dar respuesta al siguiente cuestionamiento planteado.

b. En el cargo de Policía Comercial adscrito a la Dirección de Seguridad Municipal, ¿El actor tiene la calidad de miembro de una institución policial de los que pertenecen a la carrera policial y originan una relación administrativa con la autoridad pública?

Continuando con el orden propuesto para este análisis, la siguiente cuestión a resolver consiste en determinar si en el cargo de "Policía Comercial adscrito a la Dirección de Seguridad Municipal", el actor contaba con la **calidad de miembro de una institución policial** de los que pertenecen a la **carrera policial** y originan una **relación administrativa** con la autoridad pública; para lo cual, se hace necesario contrastar su designación con el marco normativo previamente establecido.

Lo anterior implica, que para determinar si el actor mantenía una relación administrativa o laboral, se debe determinar si pertenecía a la Carrera Policial, ya que, de no pertenecer, se consideraría un trabajador de confianza.

Al respecto, esta Sala Especializada advierte de un análisis a la normatividad relativa a las funciones y organización de la Dirección de Seguridad Municipal del Ayuntamiento de Tecate, que al momento en el que ocurre el acto impugnado, el actor en su puesto de "Policía Comercial" desempeñaba el servicio consistente en la prestación del **servicio de vigilancia a comercios, empresas y a particulares**, mediante el pago de una tarifa establecida en la Ley de Ingresos del Municipio, por lo tanto, **no conformaba la carrera policial de seguridad pública**.

Veamos, el Reglamento Interior para la Dirección de Seguridad Municipal, vigente al momento de los hechos narrados por el actor, en su Capítulo Cuarto, denominado "Estructura Orgánica", específicamente, en sus artículos 19 y 28, establece la existencia de la **Jefatura del Departamento de la Policía Comercial** que se encarga de la coordinación y administración del **servicio de vigilancia** que se brinda a **comercios, empresas, eventos particulares, bancos e industrias** a cambio del **pago de una tarifa** establecida en la Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, para el ejercicio Fiscal correspondiente.

Al respecto, debemos definir el marco jurídico que da origen a los reglamentos municipales que definen la estructura y organización de las instituciones de seguridad pública municipal, principalmente, el **dieciocho de junio de dos mil ocho** se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, por el cual se modificaron y adicionaron diez artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos el artículo 123, apartado B, fracción XIII, que constituye la base del actual régimen especial para los miembros de las instituciones policiales del País.

El dos de enero de **dos mil nueve** se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en materia de regulación de la carrera policial, de seguridad pública y privada.

La citada Ley General dispone la creación de **Leyes Estatales de seguridad pública**, en las cuales se establecerán los procedimientos para la aplicación de las normas en materia de carrera policial y régimen disciplinario para las instituciones policiales de las entidades federativas y los municipios.

En concreto, en el estado de Baja California el veintiocho de diciembre de **dos mil veinte**, se publicó la nueva Ley de Seguridad Pública del Estado, cuya denominación fue reformada mediante decreto publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno para quedar como Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California (denominación actual y vigente).

Los artículos 1, último párrafo, y 94, fracción IV, de la Ley de Seguridad Ciudadana, establecen que los **municipios**, atendiendo a su **autonomía** y conforme a su propia organización, **determinarán** en sus respectivos **reglamentos**, quienes, en su caso, **serán excluidos de la aplicación del régimen administrativo** que regula el servicio de seguridad pública.

Es decir, la Ley estatal establece una reserva reglamentaria para que los municipios puedan definir que puestos y plazas de los que integran las instituciones policiales

municipales quedan comprendidos en el régimen administrativo de la carrera policial.

Entonces, el Reglamento Interior para la Dirección de Seguridad Municipal de Tecate, en sus artículos 19 y 28, establece la creación de una Jefatura de Departamento de la **Policía Comercial**, cuyo propósito es brindar el **servicio de vigilancia a comercios, empresas, eventos particulares, bancos e industrias** a cambio del **pago de una tarifa** establecida en la Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, distinguiendo claramente las funciones de los elementos integrantes de la **Policía Comercial**, definiéndola como un **servicio de vigilancia a particulares** que lo requieran mediante el pago de una tarifa.

Aunado a ello, el artículo 28 del Reglamento Interior para la Dirección de Seguridad Municipal establece que por la prestación de los servicios de Policía Comercial **se cubrirá por parte de los particulares una tarifa** prevista en la Ley de Ingresos del Municipio (artículo 49 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecate para el ejercicio fiscal 2025), en tanto que el servicio de seguridad pública es un derecho humano que no genera el cobro de derechos o tarifas especiales a los particulares.

Así, el artículo 28 del Reglamento Interior para la Dirección de Seguridad Municipal establece que la Policía Comercial se encargará de la prestación del **servicio de vigilancia a particulares** que lo requieran mediante el pago de una tarifa, es decir, del texto de dicho precepto se establece que los integrantes de la Policía Comercial **no tiene entre sus funciones prestar estos servicios de manera general a la población**, sino a personas que **los requieran en lo particular mediante el pago de la tarifa correspondiente**, por lo que incluso aunque puedan realizar funciones de seguridad y orden, estas **se realizan para la persona física o moral que los haya requerido** y no constituye un servicio público que se brinde de manera general.

De lo anterior, se infiere que el Reglamento Interior para la Dirección de Seguridad Municipal definió el **servicio de Policía Comercial** como un servicio de **vigilancia privada** y no de seguridad pública, distinguiendo y sustrayendo el servicio de vigilancia comercial de la estructura operativa y técnica a través de las cuales se presta el servicio de policía de seguridad pública.

Esta disposición permite establecer la voluntad del Ayuntamiento de Tecate, al ejercer su facultad reglamentaria, de distinguir entre los integrantes de la **Policía Comercial** y los miembros de la institución policial municipal de seguridad pública, de lo que se concluye que **se trata de cargos de naturaleza diversa**.

El citado Reglamento municipal, al establecer tal estructura, respeta los principios de reserva de ley y se encuentra dentro de los límites de la facultad reglamentaria de los municipios, en razón de que **la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana reserva a los reglamentos municipales la definición de los cargos y elementos policiales de los municipios que pertenecen a la regulación administrativa**, es decir, es conforme con la Constitución Federal y la legislación Estatal, y versa sobre el servicio de policía y la organización interna de la administración municipal que constitucionalmente son competencia de reglamentación por los municipios.

Sirve de apoyo a esta conclusión, las siguientes tesis que constituyen jurisprudencia.

REGLAMENTOS MUNICIPALES Y LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. SU EXTENSIÓN NORMATIVA LEGÍTIMA.

Para precisar la extensión normativa legítima de cada una de las fuentes normativas contempladas en la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben considerarse varios puntos: 1. La regulación de aspectos generales en las leyes estatales en materia municipal debe tener por objeto únicamente establecer un marco normativo homogéneo -adjetivo y sustantivo- para los Municipios de un Estado. Estas leyes deben incorporar el caudal normativo indispensable para asegurar el funcionamiento del Municipio, únicamente sobre aspectos que requieran dicha uniformidad; 2. Debe tomarse en cuenta que **la competencia reglamentaria del Municipio le garantiza una facultad exclusiva para regular los aspectos medulares de su propio desarrollo**; 3. Es inaceptable que, con apoyo en la facultad legislativa con que cuenta el Estado para regular la materia municipal, intervenga en cuestiones específicas de cada Municipio, que le están constitucionalmente reservadas a este último, pues las bases generales de la administración pública municipal no pueden tener, en otras palabras, una extensión temática que anule la facultad del Municipio para reglamentar sus cuestiones específicas. En consecuencia, **queda para el ámbito reglamentario, como facultad exclusiva de los Ayuntamientos, lo relativo a policía y gobierno, organización y funcionamiento interno**, administración pública municipal, así como emitir normas sustantivas y adjetivas en las materias de su competencia exclusiva, a través de bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de carácter general, en todo lo que concierne a cuestiones específicas de cada Municipio; y 4. Las leyes

estatales en materia municipal derivadas del artículo 115, fracción II, inciso a), constitucional, esto es, las encargadas de sentar "las bases generales de la administración pública municipal", comprenden esencialmente aquellas normas indispensables para el funcionamiento regular del Municipio; del Ayuntamiento como su órgano de gobierno y de su administración pública; las normas relativas al procedimiento administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los incisos incluidos en la reforma de 1999, así como la regulación de los aspectos de las funciones y los servicios públicos municipales que requieren uniformidad, para efectos de la posible convivencia y orden entre los Municipios de un mismo Estado.

Registro digital: 160764. Instancia: Pleno. Décima Época. Materias(s): Constitucional. Tesis: P./J. 45/2011 (9a.). Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1, página 302. Tipo: **Jurisprudencia**.

FACULTAD REGLAMENTARIA MUNICIPAL. SUS LÍMITES.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Ayuntamientos están facultados para expedir, de acuerdo con las bases que deberán establecer las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, también lo es que dichos órganos, en ejercicio de su facultad regulatoria, deben respetar ciertos imperativos, pues las referidas normas de carácter general: 1) **No pueden estar en oposición a la Constitución General** ni a las de los Estados, así como tampoco a las leyes federales o locales; 2) En todo caso, deben **adecuarse a las bases normativas que emitan las Legislaturas de los Estados**; y, 3) Deben **versar sobre materias o servicios que le correspondan legal o constitucionalmente a los Municipios**.

Registro digital: 187983. Instancia: Pleno. Novena Época. Materias(s): Constitucional. Tesis: P./J. 132/2001. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002, página 1041. Tipo: Jurisprudencia.

Por otra parte, lo establecido en el Reglamento Interior para la Dirección de Seguridad Municipal de Tecate, al distinguir a los integrantes de la Policía Comercial de los miembros policiales que prestan el servicio de seguridad pública, también es acorde con lo que ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 93/2012,¹ en la que se determinó que de conformidad

¹ "Es menester puntualizar que, la carrera policial, de conformidad con el artículo 78 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es el "sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las instituciones policiales" (...)

De lo aducido, es inconcuso que sólo los miembros de las instituciones policiales que realicen efectivamente la función de policía y que, por tanto, estén sujetos a la carrera policial en los términos señalados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estarán sujetos al régimen de excepción previsto en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, constitucional y, en consecuencia, los demás miembros que, aun perteneciendo a dichas instituciones, no realicen funciones similares de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de

con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Carrera Policial es considerada para los miembros de las Instituciones Policiales que **realicen efectivamente la función de policía**, y que, en consecuencia, los demás miembros que, **aun perteneciendo a dichas instituciones, no realicen funciones similares de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública** y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantendrán una **relación laboral** con la Institución Policial.

Lo que contribuye a la conclusión de que no obstante que el actor haya desempeñado el puesto de Policía Comercial, esto no implica que automáticamente deba catalogársele como miembro de una institución policial incorporado a la carrera policial, sino que **debe atenderse a la Reglamentación Municipal y a las funciones que realizaba** para distinguir si se trata o no de un **miembro de la carrera policial**.

Ahora, por lo que hace a la prueba consistente en oficio original numero (2)*****, suscrito por la Directora General del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Fiscalía General del Estado, ofrecido por el actor, visible a fojas 36 a 36 de autos, en el que esencialmente se indica que el actor **(1)******* fue citado para someterse a la evaluación de control de confianza el siete de enero de dos mil veinticinco, a solicitud de la Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Tecate, en su carácter de Policía Comercial adscrito a la Dirección de Seguridad Municipal, este cuenta con valor probatorio pleno para acreditar su existencia y contenido de conformidad con lo dispuesto en los artículo 285, fracción III, 322, fracción II, y 405 del Código Civil Adjetivo, al tratarse de un documento emitido por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que corresponden a su cargo, y por no estar contradicho por prueba en contrario.

Sin embargo, dicha prueba **no tiene el alcance y la eficacia** necesaria para sustentar el argumento del actor

carrera policial, mantendrán una relación de naturaleza laboral con la institución policial de mérito y, por tanto, se registrarán por la fracción XIV del multicitado precepto constitucional.

Ello, en virtud de que a la luz de la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve, se promueve que los servidores públicos que efectivamente estén facultados para ejercer las atribuciones propias de la función policial se sujeten a un régimen excepcional que garantice a la sociedad, una labor sustentada en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos y que satisfagan los fines generales de la seguridad pública, es decir, que se salvaguarde la integridad y derechos de las personas, se preserven las libertades, el orden y la paz públicos. Por tanto, ante el incumplimiento de los principios rectores de la función policial, los miembros de las instituciones –bajo la delimitación señalada- podrán ser removidos de su cargo en las condiciones que circunscribe el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, constitucional y la legislación secundaria aplicable. (...)."

consistente en que el hecho de haber sido sometido al proceso de evaluación y control de confianza en su calidad de Policía Comercial demuestra que sí pertenece a la Carrera Policial.

Tal argumento **resulta infundado**, en virtud de que según dispone el artículo 26 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, el proceso de evaluación y control de confianza para la selección, ingreso o permanencia, también se aplicará a los **elementos de apoyo**, e incluso a los integrantes de servicios de seguridad privada.

De tal forma, aunque haya quedado acreditado que el actor en su calidad de Policía Comercial fue sometido al proceso de evaluación y control de confianza, tal circunstancia no tiene el efecto inmediato y directo de acreditar que por ese solo hecho del actor pertenece a la Carrera Policial, en virtud de que la aplicación del proceso de evaluación y control de confianza **no es exclusiva de los miembros de la institución de seguridad que conforman la Carrera Policial**, sino que **se aplica también a los elementos de apoyo** que tiene **relación laboral** de confianza con la institución de seguridad pública, de ahí lo **infundado** de su argumento.

Luego, las pruebas ofrecidas por la parte actora fueron aptas para demostrar que desempeñó el puesto de Policía Comercial adscrito a la Dirección de Seguridad Municipal; pero, **resultaron ineficaces** para acreditar que se hubiere expedido un nombramiento policial a nombre **(1)******* por autoridad competente, así como **tampoco fueron aptas** para demostrar que el actor hubiere desempeñado funciones de seguridad pública de las que competen a los miembros de las instituciones policiales, por lo que, **resultan insuficientes para acreditar la existencia de la relación administrativa entre el actor y la autoridad pública municipal**.

Por ello, atendiendo a que **no se logró acreditar** que el actor **(1)******* contara con un nombramiento policial emitido por autoridad competente, aunado a que, se demostró que las funciones que desempeñaba el actor no correspondían a las de seguridad pública que competen a los miembros de la Carrera Policial, es que **se concluye** que el demandante **(1)***** no contaba con la calidad de miembro** de la institución policial y **no pertenecía a la carrera policial**.

Encuentra apoyo esta determinación en las siguientes tesis judiciales sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, en las que se distingue entre la relación administrativa o laboral de los integrantes de una institución policial y las autoridades públicas, atendiendo no solo a lo que dispone la normatividad aplicable sino además a la función que éstos realizan, las cuales se invocan como criterio orientador:

TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES EN LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO QUE NO PERTENEZCAN A LA CARRERA POLICIAL. POR DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA, SE CONSIDERAN DE CONFIANZA.

De conformidad con el artículo 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las relaciones jurídicas entre las instituciones policiales y sus integrantes se rigen por la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esa ley y demás disposiciones legales aplicables establecen expresamente que **todos los servidores públicos de dichas instituciones**, en los tres órdenes de gobierno, **que no pertenezcan a la carrera policial, se considerarán trabajadores de confianza**, por lo que los efectos de su nombramiento podrán darse por terminados en cualquier momento; de ahí que, al derivar dicha calidad de la ley, es innecesario que se acrediten las funciones desempeñadas de las contenidas en el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para saber si corresponden a las de dirección, decisión, administración, inspección, vigilancia o fiscalización y, por ende, si son o no propias de un empleo de confianza, pues el fundamento para que éstos sean considerados trabajadores con tal calidad, se encuentra en la normativa referida.

Época: Décima Época, Registro: 2014877, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, Materia(s): Laboral, Tesis: I.6o.T. J/43 (10a.), Página: 2744, SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

INTEGRANTES DE LA POLICÍA AUXILIAR Y LA BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE TABASCO. SON TRABAJADORES DE CONFIANZA.

Hechos: En amparo indirecto se reclamó la orden de baja, destitución o cese de integrantes de la Policía Auxiliar y la Bancaria, Industrial y Comercial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco. La autoridad responsable negó el acto reclamado, por lo que la persona juzgadora sobreseyó en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; sin embargo, en el recurso de revisión se advirtió la existencia del acto reclamado, por lo que se analizó la legalidad de la conclusión del vínculo laboral entre la parte quejosa y dicha corporación.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que **las personas integrantes de la Policía Auxiliar y la Bancaria, Industrial y Comercial de la Secretaría de**



Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, **son trabajadoras de confianza.**

Justificación: El artículo 71 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública local no prevé que la relación jurídica entre las personas integrantes de dicha corporación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de esa entidad se rija conforme al régimen excepcional previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que **dicha institución no pertenece al Servicio de Carrera Policial**; por ende, se regula de acuerdo con la diversa fracción XIV del referido precepto constitucional y, en consecuencia, aquéllas tienen el carácter de trabajadoras de confianza, pues sus cargos obedecen a una de libre designación y a razones de estricta confianza, confidencialidad y seguridad, por lo que se distinguen por carecer del derecho a la estabilidad en el empleo y únicamente gozan de las medidas de protección al salario y de los beneficios a la seguridad social.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CIRCUITO.

Registro digital: 2028627. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Undécima Época. Materias(s): Laboral, Administrativa. Tesis: X.A.4 A (11a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Abril de 2024, Tomo V, página 4557. Tipo: Aislada.

ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE HIDALGO. LA HIPÓTESIS RELATIVA A LA CONCLUSIÓN DE SU SERVICIO POR TERMINACIÓN DEL NOMBRAMIENTO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA ENTIDAD, ÚNICAMENTE ES APLICABLE AL PERSONAL DE CONFIANZA.

Hechos: En un juicio contencioso administrativo, un policía municipal demandó la nulidad de la separación de su cargo de manera injustificada. La autoridad demandada, en su defensa exhibió contratos de prestación de servicios por tiempo determinado celebrados con aquél, argumentando que no fue separado, sino que culminó la relación laboral por el vencimiento del contrato. La Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo estimó que la parte actora no acreditó la existencia del acto administrativo impugnado, lo que posteriormente fue confirmado en el recurso de revisión por la Sala Superior.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la hipótesis prevista en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo, relativa a la conclusión del servicio de los integrantes de las instituciones policiales derivada de la "terminación de su nombramiento", únicamente es aplicable al personal de confianza, es decir, a aquellos funcionarios de dichas instituciones que **no pertenecen a la carrera policial**, caso en el cual los efectos de su nombramiento podrán darse por terminados en cualquier momento.

Justificación: Lo anterior, porque de los artículos 6 y 45 de la ley citada se advierte que las instituciones de seguridad pública estatal y municipales del Estado de Hidalgo cuentan – para el adecuado ejercicio de sus funciones– con integrantes de las dependencias encargadas de la seguridad pública y con

personal operativo de la policía industrial bancaria y de los organismos auxiliares; que todos los servidores públicos de las instituciones policiales que no pertenezcan a la carrera policial se considerarán trabajadores de confianza y los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables o cuando no acrediten las evaluaciones de control de confianza. Ahora bien, de dichos preceptos se aprecia que la intención del legislador fue: a) **distinguir los tipos de funcionarios que prestan servicios de policía**, de los que lo hacen como operativos y b) **diferenciar la carrera policial, de los trabajadores de confianza**. En ese sentido, la hipótesis contenida en el artículo 56 de la ley invocada, que se refiere a la conclusión del servicio de los integrantes de las instituciones policiales derivado de la "terminación de su nombramiento" únicamente es aplicable al personal de confianza, puesto que entre los servidores públicos que cuentan con nombramiento de policía y aquellos de confianza, existen las siguientes diferencias: 1. Los primeros están sujetos al servicio de carrera, por lo que sólo pueden ser separados de su cargo en caso de que no cumplan con los requisitos legales de permanencia o por incurrir en una causa de responsabilidad administrativa; su relación está sujeta a las reglas de carácter administrativo y, por ende, en caso de que se determine que su separación se dio en forma injustificada, sólo tienen derecho al pago de la indemnización y demás prestaciones procedentes en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2. **Los segundos no están sujetos al servicio de carrera; su nombramiento puede darse por terminado en cualquier tiempo y su relación es de naturaleza laboral**, por lo que quedan sujetos al artículo 123, apartado B, fracción XIV, constitucional. Por tanto, para dar por terminado un nombramiento de un empleado de confianza bastará, entre otras hipótesis, que concluya su nombramiento, lo que no acontece tratándose de miembros de las instituciones policiales que ejerzan funciones de policía, ya que para ello constituirá un requisito indispensable el seguimiento del procedimiento administrativo ante el Consejo de Honor y Justicia del ente municipal demandado, pues es el único órgano facultado para decidir –previa observancia de las formalidades esenciales establecidas en el artículo 108 de la ley citada–, si se actualiza algún supuesto que conlleve la terminación de la relación administrativa originada con tal acto condición.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Registro digital: 2025956. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Undécima Época. Materias(s): Administrativa. Tesis: (IV Región)2o.3 A (11a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Febrero de 2023, Tomo IV, página 3638. Tipo: Aislada.

A continuación, se procede a examinar lo relativo al último de los cuestionamientos planteados.

c. ¿Existió un acto administrativo emanado de una relación de supra a subordinación por el cual se haya determinado la separación del actor del cargo de



Policía Comercial?, o, ¿Se trata de un acto que se originó en una relación de coordinación de naturaleza laboral?

BAJA CALIFORNIA

Para definir dicha cuestión, se plantea el siguiente razonamiento.

Conforme con lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la naturaleza jurídica del cargo que se acreditó que desempeñaba el actor corresponde a la de un **trabajador de confianza**, dado que no se acreditó que perteneciera a la Carrera Policial al no contar con nombramiento policial emitido por autoridad competente y no haber desempeñado funciones de seguridad pública, luego entonces, la relación jurídica que guarda con el municipio **no es de naturaleza administrativa** de las que se regulan por el régimen especial previsto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, y sus leyes reglamentarias.

La relación existente entre el actor y el municipio correspondería a una relación jurídica de coordinación de naturaleza laboral, en la que el municipio y/o Ayuntamiento de Tecate constituiría la parte patronal y el actor un trabajador de confianza, regulada por las leyes en materia laboral burocrática del Estado.

En consecuencia, **la remoción libre que reclama como acto impugnado no constituye un acto administrativo**, sino un acto surgido en una relación jurídica de coordinación **de naturaleza laboral**, por lo que **no existe un acto administrativo que haga procedente el presente juicio.**

Por consiguiente, al no constituir el acto impugnado un acto administrativo definitivo impugnabile ante este Tribunal, **se actualiza la causal de improcedencia** prevista en el artículo 54, fracción XI, en relación con lo dispuesto en los artículos 1, segundo párrafo, 27, fracción II, inciso b), y 66, fracción II, de la Ley del Tribunal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 55, fracción II, de la ley en cita, **se decreta el SOBRESEIMIENTO en el juicio.**

Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 107 de la Ley del Tribunal, se...

RESUELVE:



ÚNICO.- Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 54, fracción XI, en relación con lo dispuesto en los artículos 1, segundo párrafo, 27, fracción II, inciso b), y 66, fracción II, de la Ley del Tribunal, y en consecuencia, **SE SOBRESEE en el presente juicio**, conforme con lo dispuesto en el artículo 55, fracción II, de la citada Ley.

Notifíquese por Boletín Jurisdiccional a las partes.

Así lo resolvió la licenciada Leticia Castro Figueroa, Primer Secretaria de Acuerdos de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, quien actúa en funciones de Magistrada por ministerio de ley, según designación hecha mediante acuerdo emitido en sesión de Pleno de este órgano jurisdiccional de fecha nueve de julio de dos mil veinticinco, en términos de lo dispuesto por los artículos 12 y 21, fracciones V y XII, de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California publicada el dieciocho de junio de dos mil veintiuno en la sección I del Periódico Oficial del Estado de Baja California y firmó ante la presencia del Secretario de Acuerdos, licenciado Julián Javier Flores Zurita, quien da fe.

"1.- ELIMINADO: Nombre, 7 párrafo (s) con 7 renglones en fojas 1, 5, 16, 17, 18, 24 y 25.

Fundamento legal: artículos 54, 99 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Apertura Institucional para el estado de Baja California, 55, 59 del Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.

La clasificación de la información como confidencial se realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos personales sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales."

"2.- ELIMINADO: Oficio, 5 párrafo (s) con 5 renglones en fojas 15, 16, 17, 18 y 24.

Fundamento legal: artículos 54, 99 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Apertura Institucional para el estado de Baja California, 55, 59 del Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.

La clasificación de la información como confidencial se realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos personales sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales."

El suscrito Licenciado Julián Javier Flores Zurita, Secretario de Acuerdos de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa De Baja California, hace constar: -----

Que lo transcrito con anterioridad corresponde a una versión pública de resolución de primera instancia dictada en el expediente 54/2025 SE en la que se suprimieron datos que se han clasificado como confidenciales, cubriendo el espacio correspondiente, insertando diez asteriscos, versión que va en treinta (30) fojas útiles. -----

Lo anterior con fundamento en lo establecido por los artículos 54, 60, FRACCIÓN III, B), 99, 104 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Apertura Institucional para el Estado de Baja California, y 55, 57, 58, 59 del Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los veinte días del mes de octubre de dos mil veinticinco.-----



SALA ESPECIALIZADA
EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
MEXICALI, B.C.